EJES PROGRAMÁTICOS

Antonio Trejos Mazariegos

Frente Amplio – Elecciones Legislativas 2026

Creo en un proyecto político comprometido con la justicia social, la igualdad de derechos, la sostenibilidad ambiental, la defensa de los servicios públicos y la institucionalidad democrática. Lejos de seguir un recetario de proyectos de ley, nuestra próxima bancada frenteamplista debe estar dispuesta al diálogo con los distintos sectores sociales y comunidad, a innovar y a dar continuidad al legado de dos décadas de nuestro movimiento político.

Como diputado frenteamplista daré seguimiento al programa legislativo de la fracción legislativa anterior, presentaré nuevas propuestas propias y también acogeré las buenas ideas que la ciudadanía y personas expertas nos propongan para el bien común, de acuerdo con los siguientes cinco ejes programáticos fundamentales: **1) Justicia Económica y Laboral; 2) Transparencia, Democracia y Reforma Institucional; 3) Vida Digna y Derechos Humanos, 4) Ambiente, territorio y los bienes comunes; y 5) Educación, Salud, Seguridad Social y Justicia.**

1. JUSTICIA ECONÓMICA Y LABORAL

Frente al estancamiento económico y el crecimiento de la desigualdad, propongo avanzar hacia reformas estructurales del modelo laboral y económico actual.

- **Fortalecimiento de la inspección laboral, defensa pública laboral y modernización del Código de Trabajo** frente a los retos contemporáneos y las nuevas plataformas digitales, incluyendo la reducción de la jornada laboral ordinaria sin reducción salarial, aumentando la productividad y oportunidades de trabajo dirigido a formalizar y dignificar las condiciones de empleo.
- **Reforma fiscal progresiva**, con una política anti-evasión (y anti-elusión) agresiva, incluyendo el trasladado el peso de las cargas sociales (como FODESAF) del

empleo al capital, para generar más empleo y que quienes tienen más paguen más y el pago de la deuda del Estado con la CCSS.

- **Invertir en el futuro**, mediante la apuesta a nuevas tecnologías y universalización y ampliación de la Red de Cuido, para que más familias puedan incorporarse al empleo formal, con un enfoque comunitario, educativo y preventivo de la violencia.
- **Apoyo a cooperativas, pymes y encadenamientos productivos locales a partir de créditos accesibles** para la producción que dinamicen la economía nacional. El sistema bancario nacional y los incentivos institucionales (incluyendo al turismo y producción) debe volver a invertir en quienes emprenden con una perspectiva climática, de sostenibilidad y de apoyo a los sectores más vulnerables. El Estado puede y debe ser un motor del desarrollo para que las personas puedan producir más y mejor.

2. TRANSPARENCIA, DEMOCRACIA Y REFORMA INSTITUCIONAL

Frente a la crisis democrática, propongo medidas contundentes para recuperar la confianza pública en nuestras instituciones:

- **Leyes contra la corrupción**, el lobby oculto, puertas giratorias, el enriquecimiento ilícito sin justa causa, y la impunidad imperante en estos casos. Impulsaremos la consolidación de una jurisdicción anticorrupción que incluya los delitos electorales, pues la ética debe ser un principio fundamental de todo servicio público.
- **Declaración pública patrimonial de altos funcionarios**, eliminación de fueros de protección para delitos de corrupción y equidad en el financiamiento de los procesos electorales. Debemos denunciar y evidenciar a quienes instrumentalizan nuestras instituciones para provecho propio en detrimento del interés general.
- **Rescatar el Observatorio de Compras Públicas**. SICOP debe facilitar la analítica de datos de compras públicas, mediante indicadores, reportería de datos y visualización gráfica para el monitoreo y el acceso de la ciudadanía y entidades fiscalizadoras de los procesos de contratación administrativa de forma pública y abierta.

- **Actualizar el reglamento legislativo** para garantizar derechos democráticos y control político efectivo. Las Comisiones y órganos del parlamento deben garantizar el análisis crítico y la participación ciudadana en todos los asuntos de interés públicos.

3. VIDA DIGNA Y DERECHOS HUMANOS

Frente a la amenaza autoritaria, propongo trabajar una agenda interseccional de derechos humanos donde el desarrollo y la libertad vayan de la mano de la igualdad y la dignidad.

- **Reformas integrales para enfrentar la violencia y avanzar hacia la igualdad** real de las mujeres, la población adulta mayor, sexualmente diversa, con discapacidad, afrodescendientes, indígenas, migrantes y todas las personas que sufren discriminación en los servicios estatales. Mano dura contra el odio y la discriminación que impiden el pleno desarrollo de las personas.
- **Fortalecimiento del sector social del estado costarricense** (IMAS, INAMU, PANI, Vivienda, etc.) y su relación con sociedad civil para ampliar y consolidar las redes de atención a personas y comunidades en condición de vulnerabilidad para dignificar y superar la exclusión, avanzando en la universalización de SINIRUBE como mecanismo para la asignación de ayudas del Estado, evitando la duplicidad y la politiquería en la asignación de beneficiarios.
- **Reivindicación del diálogo democrático y la negociación transparente** para la toma de decisiones, por encima del uso de la violencia, la intimidación y la matonería como formas normalizadas de política. Con argumentos, insistencia y convicción el próximo primer domingo de febrero pondremos fin al burdo y grotesco espectáculo político de Rodrigo Chaves sin regresar a los oscuros tiempos del bipartidismo.
- **Rescate del arte, la cultura y patrimonio nacional**, incluyendo la reforma integral a las leyes de Patrimonio Histórico-Arquitectónico y Arqueológico, la modernización de la legislación que regula el uso del espectro radioeléctrico, el acceso a la cultura como parte de la canasta básica y la promoción de políticas públicas que dignifiquen el trabajo artístico y el desarrollo de programas culturales a nivel nacional y

descentralizado para potenciar la economía nacional de cultura y arte y defender el valor de estas expresiones como baluarte democrático costarricense.

4. AMBIENTE, TERRITORIO Y LOS BIENES COMUNES

Frente al proceso de abandono y privatización de los bienes públicos, propongo una defensa comprometida del ambiente, las comunidades y la planificación territorial justa que pueda hacer frente a la crisis climática.

- **Fortalecimiento de la gobernanza ambiental-territorial y descentralizada**, dándole recursos y capacidad técnica al SINAC, SETENA, FONAFIFO, así como a los acueductos comunales (ASADAS) y Municipalidades para que puedan hacer su trabajo sin intromisión politiquera en beneficio de las mayorías. En mi gestión legislativa priorizaré el trabajo con las municipalidades y bancadas frenteamplistas en los cantones de todo el país.
- **Ordenamiento territorial con criterios de equidad y sostenibilidad**, reformando la legislación sobre uso y protección de bienes demaniales, para garantizar el acceso de todas las personas a las playas y demás espacios públicos, evitar la gentrificación y el despojo y mercantilización de nuestras comunidades, poner en práctica el derecho a la ciudad, así como detener el abuso extendido de instrumentos legales para aprovecharse y destruir el patrimonio colectivo.
- **Intervención del CTP y transformación de nuestro modelo de transporte público**, incluyendo el ordenamiento del sistema de buses y su infraestructura, el impulso al tren eléctrico, priorizando el transporte masivo y la movilidad segura y efectiva de personas. Debemos sacar los intereses corporativos de la mesa de decisiones de la política de transporte público.
- **Defensa de la soberanía ambiental y la inversión en el campo y las costas**. Llevar inversiones a la producción agrícola, pesquera y acuícola para preparar a nuestros productores frente a los retos de la crisis climática con mejores técnicas y menor dependencia de agro-venenos y práctica no sostenibles. La producción rural y la protección ambiental pueden y deben ir de la mano.

- **Garantizar que nuestro modelo energético sea sostenible y solidario.** Rechazar la mal llamada “armonización eléctrica” y la privatización del mercado energético, así como los intentos de explotación petrolera y de gas en nuestro territorio. El ICE debe estar al servicio de la ciudadanía costarricenses, no de los intereses y contratos de empresas extranjeras.

5. EDUCACIÓN, SALUD, SEGURIDAD SOCIAL Y JUSTICIA

Frente a debilitamiento de nuestro Estado Social de Derecho, la defensa de los servicios públicos es un eje central toda gestión frenteamplista.

- **Desburocratización de funciones docentes y especialización del sistema educativo público** (colegios humanísticos, científicos, técnicos, bilingües) para potenciar las capacidades del estudiantado y educadores, asegurando que el aumento sostenido de la inversión en educación sea bien dirigido, así como regular los excesos en tarifas de universidades privadas y fortalecimiento de becas.
- **Impulso a la Educación integral** con enfoque intercultural, científico, crítico y de ciudadanía democrática, frente a los resabios de discriminación, ultra conservadurismo y teorías conspirativas en nuestro sistema educativo. La educación deben ser una herramienta para la liberación de las personas, no para su sometimiento.
- **Reforma a los esquemas de cotización para personas trabajadoras independientes y pequeñas empresas**, facilitando la formalización y nuevos esquemas de trabajo u autoempleo decente.
- **Controlar los productos más dañinos.** Impuestos especiales a productos ultra-procesados, al desperdicio masivo de alimentos y a productos como el tabaco, los *pens*, y el alcohol para financiar la salud pública desde un enfoque preventivo e informativo, incluyendo el etiquetado a los alimentos más dañinos.
- **Impulsar la profesionalización y mejoramiento de los sistemas de seguridad social y justicia**, para detener la fuga de personal capacitado en la CCSS y el Poder Judicial y garantizar una atención de primera calidad para los usuarios de estos servicios, mediante esquemas justos de reconocimiento laboral que valoren la

calidad del servicio y la alta preparación del personal de primera línea en seguridad social y justicia, así como medidas de fiscalización que aseguren castigos fuertes a quienes incumplen su deber como servidores públicos y reformas a los sistemas administrativos, para reducir tiempos de espera y atención.